Notas aclaratorias para el lector

El comentario al Capítulo VIII de la CADH (Disposiciones Comunes de la Corte IDH) está dividido en dos secciones. En la primera sección se analizan los artículos 52 a 60, y en la segunda sección los artículos 61 a 62 y 64 a 69.

Para un mejor análisis, este comentario difiere de la estructura seguida en los otros textos que integran la obra, por lo que al inicio de cada una de las secciones el lector encontrará la bibliografía y el contenido, mientras que las disposiciones de los artículos de la CADH que se analizan en cada sección, se encontrarán transcritas a lo largo del comentario.

El artículo 63 de la CADH (reparaciones y medidas provisionales) se analiza en un texto independiente, el cual se encuentra al final del comentario al artículo 69.

CAPÍTULO VIII- LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS¹

Bibliografía

Primera sección de las disposiciones comunes de la Corte IDH

Normas relevantes

Estatuto de la Corte IDH. Aprobado mediante resolución n.º 448 adoptada por la Asamblea General de la OEA en su IX periodo de sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, octubre de 1979. En adelante: Estatuto de la Corte IDH.

Reglamento de la Corte IDH de 1980. Aprobado por la Corte IDH en su III periodo ordinario de sesiones, celebrado del 30 de junio al 9 de agosto de 1980.

Reglamento de la Corte IDH de 1991. Aprobado por la Corte IDH en su XXIII periodo ordinario de sesiones, celebrado del 9 al 18 de enero de 1991.

Reglamento de la Corte IDH de 1996. Aprobado por la Corte IDH en su XXXIV periodo ordinario de sesiones, celebrado del 9 al 20 de septiembre de 1996.

Reglamento de la Corte IDH de 2000. Aprobado por la Corte IDH en su XLIX periodo ordinario de sesiones, celebrado del 16 al 25 de noviembre de 2000.

Reglamento de la Corte IDH de 2000 reformado en 2003. Las reformas fueron aprobadas por la Corte IDH en su LXI periodo ordinario de sesiones, celebrado del 20 de noviembre al 4 de diciembre de 2003.

Reglamento de la Corte IDH de 2000 reformado en 2009. Las reformas fueron aprobadas por la Corte IDH en su LXXXII periodo ordinario de sesiones, celebrado del 19 al 31 de enero de 2009.

Reglamento de la Corte IDH de 2009. Aprobado por la Corte IDH en su LXXXV periodo ordinario de sesiones, celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009. En adelante: Reglamento de la Corte IDH.

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Casos contenciosos

Corte IDH. *Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia.* Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C n.º 31. En adelante: Corte IDH. *Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia.* RC. 1997.

Corte IDH. *Caso Loayza Tamayo vs. Perú.* Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de junio de 1999. Serie C n.º 53. En adelante: Corte IDH. *Caso Loayza Tamayo vs. Perú.* Interpretación de la Sentencia de RC. 1999.

Corte IDH. *Caso Ivcher Bronstein vs. Perú.* Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C n.º 54. En adelante: Corte IDH. *Caso Ivcher Bronstein vs. Perú.* Competencia. 1999.

¹ A lo largo de este texto, el término ‘Reglamento actual’ o ‘Reglamento vigente’ se refiere al Reglamento de la Corte IDH de 2009, aprobado en su LXXXV periodo ordinario de sesiones, celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009.

Corte IDH. *Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú*. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C n.º 55. En adelante: Corte IDH. *Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú*. Competencia. 1999.

Corte IDH. *Caso Cesti Hurtado vs. Perú*. Fondo. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C n.º 56. En adelante: Corte IDH. *Caso Cesti Hurtado vs. Perú*. F. 1999.

Corte IDH. *Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C n.º 72. En adelante: Corte IDH. *Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá*. FRC. 2001.

Corte IDH. *Caso Las Palmeras vs. Colombia*. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C n.º 90. En adelante: Corte IDH. *Caso Las Palmeras vs. Colombia*. F. 2001.

Corte IDH. *Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C n.º 101. En adelante: Corte IDH. *Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala*. FRC. 2003.

Corte IDH. *Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C n.º 103. En adelante: Corte IDH. *Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala*. FRC. 2003.

Corte IDH. *Caso Ricardo Canese vs. Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C n.º 111. En adelante: Corte IDH. *Caso Ricardo Canese vs. Paraguay*. FRC. 2004.

Corte IDH. *Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C n.º 126. En adelante: Corte IDH. *Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala*. FRC. 2005.

Corte IDH. *Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú*. Demanda de Interpretación de la Sentencia de Fondo y Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C n.º 128. En adelante: Corte IDH. *Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú*. Demanda de Interpretación de la Sentencia de FRC. 2005.

Corte IDH. *Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana*. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C n.º 130. En adelante: Corte IDH. *Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana*. [Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas] 2005.

Corte IDH. *Caso de las hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador*. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 9 de septiembre de 2005. Serie C n.º 131. En adelante: Corte IDH. *Caso de las hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador*. Interpretación de la Sentencia de FRC. 2005.

Corte IDH. *Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C n.º 160. En adelante: Corte IDH. *Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú*. FRC. 2006.

Corte IDH. *Caso García Prieto y otro vs. El Salvador*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C n.º 168. En adelante: Corte IDH. *Caso García Prieto y otro vs. El Salvador*. EPFRC. 2007.

Corte IDH. *Caso La Cantuta vs. Perú*. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2007. Serie C n.º 173. En adelante: Corte IDH. *Caso La Cantuta vs. Perú*. Interpretación de la Sentencia de FRC. 2007.

Corte IDH. *Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú*. Solicitud de Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de Noviembre de 2007 Serie C n.º 174. En adelante: Corte IDH. *Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú*. Solicitud de Interpretación de la Sentencia de EPFRC. 2007.

Corte IDH. *Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C n.º 182. En adelante: Corte IDH. *Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela*. EPFRC. 2008.

Corte IDH. *Caso Ríos y otros vs. Venezuela*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C n.º 194. En adelante: Corte IDH. *Caso Ríos y otros vs. Venezuela*. EPFRC. 2009.

Corte IDH. *Caso Perozo y otros vs. Venezuela*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C n.º 195. En adelante: Corte IDH. *Caso Perozo y otros vs. Venezuela*. EPFRC. 2009.

Corte IDH. *Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C n.º 197. En adelante: Corte IDH. *Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela*. EPFRC. 2009.

Corte IDH. *Caso Radilla Pacheco vs. México*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C n.º 209. En adelante: Corte IDH. *Caso Radilla Pacheco vs. México*. EPFRC. 2009.

Corte IDH. *Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C n.º 212. En adelante: Corte IDH. *Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala*. EPFRC. 2010.

Corte IDH. *Caso Mejía Idrovo vs. Ecuador*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2011. Serie C n.º 228. En adelante: Corte IDH. *Caso Mejía Idrovo vs. Ecuador*. EPFRC. 2011.

Corte IDH. *Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C n.º 293. En adelante: Corte IDH. *Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela*. EPFRC. 2015.

Opiniones consultivas

Corte IDH. *Artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*. Opinión Consultiva OC-20/09 de 29 de septiembre de 2009. Serie A n.º 20. En adelante: Corte IDH. Opinión Consultiva OC-20/09. *Artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos*. 2009.

Resoluciones, decisiones y otros documentos

Corte IDH. Exposición de motivos de la reforma reglamentaria. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/reglamento/nov_2009_motivos_esp.pdf (fecha de último acceso: 2017/06/25).

Corte IDH. *Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela*. Resolución de 6 de febrero de 2014.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CIDH. Informe n.º 11/07, Caso Interestatal 01/06, *Nicaragua vs. Costa Rica*, 8 de marzo de 2007.

CIDH. Informe n.º 112/10, Petición Interestatal, PI-02, admisibilidad. *Franklin Guillermo Aisalla Molina Ecuador - Colombia*, 21 de octubre de 2010.

Documentos adoptados en el seno de organizaciones internacionales

Organización de los Estados Americanos

OEA. Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Actas y Documentos. OEA/Ser.K/XVI/1.2, San José, 7-22 de noviembre de 1969. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/actas-conferencia-interamericana-Derechos-Humanos-1969.pdf> (fecha de último acceso: 2017/06/28).

OEA. Asamblea General. Sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resolución AG/RES.372 (VII-0/78), aprobada en la séptima sesión plenaria celebrada el 1 de julio de 1978.

Referencias académicas

CANÇADO TRINDADE, A A. *El futuro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. ACNUR, San José, 2003.

FAÚNDEZ LEDESMA, H. *El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Aspectos institucionales y procesales*. 3ª ed., IIDH, San José, 2009. Disponible en: https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1575/si_proteccion_ddhh_3e.pdf (fecha de última acceso: 2017/08/10).

SAAVEDRA ALESSANDRI, P. y PACHECO ARIAS, G. “Las sesiones ‘itinerantes’ de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: un largo y fecundo caminar por América”, en GARCÍA RAMÍREZ, S. y CASTAÑEDA HERNÁNDEZ, M. *Recepción nacional del derecho internacional de los derechos humanos y admisión de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana*. IJ UNAM, SRE, OEA, 2009. Disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2740/8.pdf> (fecha de último acceso: 2017/07/05).

SEPÚLVEDA, M. et al. *Universal and Regional Human Rights Protection. Cases and Commentaries*. University for Peace, San José, 2004.

VIVANCO, J. M. y BHANSALI, L. L. “Procedural shortcomings”, en HARRIS, D. y LIVINGSTONE, S. (eds.) *The Inter-American System of Human Rights*. Clarendon Press Oxford, 1998.

Otras referencias no académicas

Campaña Gqual. Hacia la paridad de género en la representación internacional. Sitio web de la campaña global: <http://www.gqualcampaign.org/inicio/> (fecha de último acceso: 2017/07/01).

Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). *Aportes para el proceso de selección de miembros de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. Documento de coyuntura n.º 1. San José, Costa Rica, Cejil, 2005.

Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). *La protección de los derechos humanos en el sistema interamericano*. 2ª ed., Buenos Aires, 2012.

Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). *Guía para defensores y defensoras de Derechos Humanos. La protección de los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano*. 2ª ed., Cejil, 2012. Disponible en: <https://www.cejil.org/es/guia-defensores-y-defensoras-derechos-humanos-proteccion-derechos-humanos-sistema-interamericano-2da> (fecha de último acceso 2017/08/18).

Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). “Organizaciones de sociedad civil lamentan silencio de la OEA ante petición de diálogo con candidatos”, de 1 de marzo de 2015, publicado en: <https://www.cejil.org/es/organizaciones-sociedad-civil-lamentan-silencio-oea-peticion-dialogo-candidatos> (fecha de último acceso: 2017/06/25).

Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). “Panel de expertos garantizará elecciones transparentes e independientes en el sistema interamericano de derechos humanos”, de 20 de marzo de 2016, publicado en: <https://www.cejil.org/es/panel-expertos-garantizar-elecciones-transparentes-e-independientes-sistema-interamericano-derechos> (fecha de último acceso: 2017/06/25).

Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). *Informe final del panel independiente para la elección de comisionadas y comisionados para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos*. Junio de 2017.

Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). “Panel de expertos insta a Estados de la OEA a promover mayor transparencia en selección de integrantes a Comisión y Corte IDH”, de 6 de junio de 2017, publicado en: <https://www.cejil.org/es/panel-expertos-insta-estados-oea-promover-mayor-transparencia-seleccion-integrantes-comision-y-corte> (fecha de último acceso: 2017/06/25).

Convenio de sede entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que incluye el régimen de inmunidades y privilegios de la Corte, sus jueces, su personal y las personas que comparezcan ante ella. Publicado en *La Gaceta* mediante Ley n.º 6889, 2 de septiembre de 1983. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/docs/otros/convenio.pdf> (fecha de último acceso: 2017/06/25).

Diversas Organizaciones de la Sociedad Civil. *Órganos de vigilancia de los tratados de las Naciones Unidas: cuestiones que deben abordarse en el proceso intergubernamental sobre el modo de fortalecer y mejorar el funcionamiento eficaz del sistema de órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos*.

LIMBACH, J. *et al. Judicial Independence: Law and Practice of Appointments to the European Court of Human Rights*. Interights, 2003. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/tablas/32795.pdf> (fecha de último acceso: 2017/08/20).

MILLER, V. *The European Court of Human Rights: the election of Judges*. Library of the House of Commons, UK, 4 de mayo de 2011.

Contenido

1. Organización y composición de la Corte IDH (artículos 52 a 54 de la CADH)	965
1.1. Requisitos de elegibilidad	965
1.2. Incompatibilidades	970
1.3. El plazo para la inscripción de candidatos y la responsabilidad en la elección de los integrantes	974
1.4. Periodo para ejercer el mandato	975
2. Jueces nacionales de casos sometidos a la Corte IDH y jueces <i>ad hoc</i> (artículo 55 de la CADH)	976
3. El funcionamiento de la Corte IDH (artículo 56 de la CADH)	978
4. Rol y facultades de la CIDH en los procedimientos ante la Corte IDH (artículo 57 de la CADH)	978
5. Sede de la Corte IDH (artículo 58 de la CADH)	980
5.1. Sede ordinaria	980
5.2. Sede extraordinaria	981
6. La Secretaría de la Corte IDH (artículo 59 de la CADH)	982
7. Estatuto y Reglamento de la Corte IDH (artículo 60 de la CADH)	983

1. Organización y composición de la Corte IDH (artículos 52 a 54 de la CADH)

Sección 1. Organización

Artículo 52

1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la Organización, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos.
2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.

Artículo 53

1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos de los Estados partes en la Convención, en la Asamblea General de la Organización, de una lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados.
2. Cada uno de los Estados partes puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los propone o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del proponente.

Artículo 54

1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un periodo de seis años y sólo podrán ser reelegidos una vez. El mandato de tres de los jueces designados en la primera elección, expirará al cabo de tres años. Inmediatamente después de dicha elección, se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres jueces.
2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, completará el periodo de éste.
3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato. Sin embargo, seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no serán sustituidos por los nuevos jueces elegidos.

1.1. Requisitos de elegibilidad

El artículo 52 de la CADH establece una serie de requisitos de elegibilidad que servirán para el mejor desempeño de las funciones de quienes integran la Corte IDH, y que se explican en este apartado. No está de más recordar que esta situación ha generado interés e inquietudes por parte de varios actores (especialmente de la sociedad civil), quienes han expresado continuamente a los Estados la importancia

de transparentar el proceso,² así como de contar tanto con la mayor diversidad en la composición de la Corte IDH, y nombrar y elegir a los y las mejores profesionales para ocupar tan importante cargo.³

1.1.1. Requisitos de idoneidad

1.1.1.1. Ser nacionales de Estados miembros de la OEA, elegidos por los Estados partes de la CADH

Cualquier miembro de la OEA puede postular a su nacional para ser elegido como juez o jueza de la Corte IDH. Dado que la CADH no hace distinciones en razón de la nacionalidad de las personas candidatas, cualquier persona proveniente de alguno de los treinta y cinco Estados miembros de la OEA puede ser juez o jueza. Esta potestad se ha visto reflejada en la práctica de la elección de quienes han integrado la Corte IDH desde sus inicios. Hasta el momento, ha habido jueces de 16 nacionalidades diferentes,⁴ incluyendo a tres países que aún no son parte de la CADH (Barbados, Estados Unidos y Jamaica).⁵ Ello, en principio, daría cuenta de la voluntad estatal de respetar la distribución geográfica en la composición de la Corte IDH.

Ahora bien, la diversidad en las nacionalidades de los jueces y juezas electos no ha sido suficiente para vencer otras barreras en la integración de la Corte IDH, poniendo de relieve la importancia de seguir democratizando tanto el proceso de selección como la elección de quienes integran los órganos de protección. Por ejemplo –y a diferencia de otros órganos regionales de protección–,⁶ sigue existiendo

2 Para las elecciones de integrantes de la CIDH y la Corte IDH de 2015, decenas de organizaciones expresaron su rechazo ante la imposibilidad de participar en el proceso de diálogo con las personas propuestas como candidatas. Ver Cejil. “Organizaciones de sociedad civil lamentan silencio de la OEA ante petición de diálogo con candidatos” de 1 de marzo de 2015, publicado en: <https://www.cejil.org/es/organizaciones-sociedad-civil-lamentan-silencio-oea-peticion-dialogo-candidatos> (fecha de último acceso: 2017/06/25).

3 En recientes fechas, diversas organizaciones de la sociedad civil que participan activamente en el SIDH, han conformado paneles de personas expertas encargadas de revisar las candidaturas propuestas por los Estados. Este ejercicio de escrutinio –realizado en 2015 y 2017– ha abierto un espacio en el que tanto los Estados que proponen candidatos/as, como quienes eligen, tengan que rendir cuentas de manera pública respecto de las propuestas que realizan. De igual manera, se ha logrado que las personas propuestas como candidatas expongan sus propuestas de trabajo, y respondan a diferentes cuestionamientos que tanto los Estados como la sociedad civil les deseen hacer. Para mayor información, consultar los siguientes vínculos electrónicos: Cejil. “Panel de expertos garantizará elecciones transparentes e independientes en el sistema interamericano de derechos humanos”, publicado en: <https://www.cejil.org/es/panel-expertos-garantizar-elecciones-transparentes-e-independientes-sistema-interamericano-derechos> (fecha de último acceso: 2017/06/25). Cejil. “Panel de expertos insta a Estados de la OEA a promover mayor transparencia en selección de integrantes a Comisión y Corte IDH”, de 6 de junio de 2017, publicado en: <https://www.cejil.org/es/panel-expertos-insta-estados-oea-promover-mayor-transparencia-seleccion-integrantes-comision-y-corte> (fecha de último acceso: 2017/06/25).

4 Los países de los cuales provienen los jueces son los siguientes: Argentina (Julio A. Barberis, Leonardo A. Franco y Eugenio Raúl Zaffaroni); Barbados (Oliver H. Jackman); Brasil (Antônio Augusto Cançado Trindade y Roberto de Figueiredo Caldas); Chile (Máximo Pacheco Gómez, Cecilia Medina Quiroga y Eduardo Vio Grossi); Colombia (César Ordóñez, Rafael Nieto Navia, Carlos Vicente de Roux-Rengifo y Humberto Sierra Porto); Costa Rica (Rodolfo E. Piza Escalante, Sonia Picado Sotela, Manuel Ventura Robles y Elizabeth Odio Benito); Ecuador (Hernán Salgado Pesantes y Patricio Pazmiño Freire); Estados Unidos (Thomas Buergenthal); Honduras (Carlos Roberto Reina, Jorge R. Hernández Alcerro y Policarpo Callejas); Jamaica (Huntley Eugene Munroe y Margarette May Macaulay); México (Héctor Fix Zamudio, Sergio García Ramírez y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot); Nicaragua (Alejandro Montiel Argüello); Perú (Máximo Cisneros Sánchez y Sergio García-Sayán); República Dominicana (Rhady Abreu Blondet); Uruguay (Héctor Gros Espiell y Alberto Pérez Pérez); y Venezuela (Pedro Nikken, Orlando Tovar Tamayo, Asdrúbal Aguiar Aranguren y Alirio Abreu Burelli). Para mayor información sobre la composición actual y anteriores de la Corte IDH, visitar el siguiente link: <http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/acerca-de/composicion> (fecha de último acceso: 2017/06/20).

5 El 10 de septiembre de 2012, Venezuela presentó formalmente su denuncia de la CADH ante el Secretario General de la OEA, la cual entró en vigor un año después, el 10 de septiembre de 2013. Si bien ha habido jueces venezolanos, todos ellos fueron elegidos mientras ese Estado seguía vinculado por la CADH. Después de la denuncia del tratado regional, no se ha vuelto a proponer a ningún candidato o candidata a la Corte IDH.

6 El artículo 14 del Protocolo Adicional a la Carta de Banjul, relativo al establecimiento de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, prevé que la Asamblea “garantizará que en la totalidad de la Corte exista representación de las principales regiones de África y de sus principales tradiciones legales” (numeral 2). Asimismo, tal

tiendo una gran brecha en el balance de género, la inclusión de representantes de pueblos indígenas, o la presentación de personas con cualquier otra característica que refleje la diversidad (de personas y condiciones) que existe en el continente. Tan solo en lo que respecta a la paridad de género, hasta el momento, la integración de mujeres ha sido excepcional en tanto que solo ha habido cinco juezas en toda la existencia de la Corte IDH.⁷ Ello ha dado pie a una serie de críticas que han sostenido, entre otras cuestiones, que:

[...] el S[IDH] debe rechazar la práctica utilizada por los Estados en numerosas ocasiones para justificar su incumplimiento con la representación de género y no postular mujeres como candidatas, de afirmar que no encuentran mujeres que cumplan con los requisitos exigidos. Esta afirmación carece de sustentación fáctica y evidencia la falta de transparencia e imparcialidad en la elección.⁸

Cabe recordar que la tendencia antes descrita se ha visto reflejada en las últimas elecciones de miembros de la Corte IDH en tanto que, a partir de 2013, la composición fue exclusivamente masculina,⁹ y lo cual cambió en 2016 al haberse elegido a la jueza Elizabeth Odio Benito, por lo que la composición actual de la Corte IDH es de seis hombres y una mujer, con características raciales similares.

Al igual que en los procesos de elección de integrantes, la sociedad civil ha iniciado campañas expresas para evidenciar la falta de paridad de género que existe en diversos órganos internacionales, de los cuales la CIDH y la Corte IDH no son la excepción.¹⁰ Por ello, y con independencia del esfuerzo realizado desde la sociedad civil, es imperativo que los Estados reflexionen y actúen de una manera distinta en elecciones futuras, y también se hace necesaria una evaluación sobre las estrategias que se pueden emplear desde diferentes sectores para proponer mayor diversidad en la integración del tribunal.

1.1.1.2. "La más alta autoridad moral y la reconocida competencia en materia de derechos humanos"

Más allá de tales diferencias, existe poco desarrollo en relación con los parámetros que podrían nutrir este requisito. Ello se evidencia en el hecho de que ni los trabajos preparatorios de la CADH,¹¹ ni el Estatuto o el Reglamento de la Corte IDH, elaboran más sobre lo que puede entenderse por "la más alta autoridad moral". No obstante, este es un tema que ha generado amplios y continuos debates.

Dada la trascendencia del proceso de nominación y elección de las personas integrantes de la Corte IDH, se han dedicado importantes esfuerzos para incentivar y aportar insumos a fin de que los Estados lleven a cabo elecciones más transparentes y respetuosas de los criterios que plantea el artículo 52 de la CADH. En tal sentido, "[a]tendiendo a los propósitos de la Convención, y a fin de asegurar la absoluta idoneidad e independencia de los elegidos, el mecanismo de selección de los jueces debería ser un aspecto de la mayor trascendencia dentro del sistema".¹² Asimismo, se ha sugerido que:

disposición establece que "en la elección de jueces, la Asamblea garantizará que exista una adecuada representación de género" (numeral 3) (traducción libre).

7 Los nombres son: Cecilia Medina Quiroga (Chile), Sonia Picado y Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), Margarette May Macaulay (Jamaica) y Rhadys Abreu Blondet (República Dominicana).

8 Cejil. *Aportes para el proceso de selección de miembros de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. Documento de coyuntura n.º 1. San José, Costa Rica, Cejil, 2005, p. 13.

9 Luego de un proceso de selección por la Asamblea General de la OEA celebrado en Washington, D.C. en junio de 2015, la composición de la Corte IDH a partir de 2016 es la siguiente: Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina), Roberto de Figueiredo Caldas (Brasil), Eduardo Vio Grossi (Chile), Humberto Sierra Porto (Colombia), Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), Patricio Pazmiño Freire (Ecuador) y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México).

10 Campaña Gqual. Hacia la paridad de género en la representación internacional. Sitio web de la campaña global: <http://www.gqualcampaign.org/inicio/> (fecha de último acceso: 2017/07/01).

11 OEA. Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Actas y Documentos. OEA/Ser.K/XVI/1.2, San José, 7-22 de noviembre de 1969. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/actas-conferencia-interamericana-Derechos-Humanos-1969.pdf> (fecha de último acceso: 2017/06/28).

12 Faúndez Ledesma, H. *El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Aspectos institucionales y procesales*. 3a. ed., IIDH, San José, 2009, p. 200. Disponible en: https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1575/si_proteccion_ddhh_3e.pdf (fecha de último acceso: 2017/08/10).

Con relación a la competencia, la experiencia en este campo no se limita a la formación académica en este ámbito, sino también al ejercicio profesional en esta arena, la habilidad intelectual para traducir los hechos y argumentos en sólidos análisis jurídicos y políticos, la capacidad para abordar diversas áreas fundamentales para el desarrollo de las funciones del órgano: especialidades jurídicas (por ejemplo: derecho del refugio), temáticas (por ejemplo, género), habilidades técnicas (por ejemplo: documentación o implementación de políticas públicas en derechos humanos), entre otras. En este ejercicio, las calidades jurídicas, profesionales y humanas de los candidatos deben primar sobre los vínculos y lealtades políticas.¹³

En el marco del SIDH se han identificado como preocupaciones la ausencia de procesos internos en los países y en el marco de la OEA para la selección de candidatos/as,¹⁴ así como la politización del proceso, la falta de transparencia en la designación,¹⁵ y posterior elección de los mismos. Asimismo la ausencia de procesos de selección de candidato/as al interior de los países, aunado a la presentación de candidaturas únicamente por el poder ejecutivo, generan amplias preocupaciones; ya que lejos de ser propuestas de Estado representan candidaturas de gobiernos.

Esos son algunos retos que deben enfrentarse a la brevedad, y si bien ha habido tímidos avances,¹⁶ es fundamental que los Estados muestren su voluntad de contar con procesos adecuados como una forma de fortalecimiento del SIDH, a partir de una composición adecuada en la integración de sus órganos. Ello, en el entendido que son los Estados los que tienen la mayor responsabilidad en este tema en particular.¹⁷

Ahora bien, también es justo reconocer que esa preocupación —compartida por diferentes sectores—, trasciende al SIDH, y tiene implicaciones similares en otros sistemas de protección. De acuerdo con Amnistía Internacional, “[l]a calidad de los miembros individuales de los órganos de vigilancia de los tratados internacionales [, en el sistema universal de las Naciones Unidas,] tiene importantes repercusiones sobre la efectividad general de los comités, así como sobre la imagen que proyectan de su independencia y capacidad.”¹⁸

En tal sentido, Amnistía Internacional ha realizado 10 recomendaciones, que si bien se hacen de cara a la composición de los órganos de supervisión de tratados de la ONU, también pueden ser

13 Cejil. *Aportes para el proceso de selección de miembros de la CIDH y Corte IDH de Derechos Humanos*. Documento de coyuntura, n.º 1, 2005, p. 13.

14 *Idem*.

15 Desde hace casi veinte años se ha sostenido que “como una preocupación estructural, la falta de transparencia en el proceso de elección de los miembros de la Comisión y la Corte, también contribuye al problema de la politización. Este fenómeno se ve agravado por el proceso de reelección en el cual los Estados —sujetos del monitoreo— determinan y conceden sus votos basados en el desempeño del comisionado o juez, lo cual amenaza la autonomía de la Comisión o la Corte.” Ver Vivanco, J. M. y Bhansali, L. L. “Procedural shortcomings”, en Harris, D. y Livingstone, S. (eds.) *The Inter-American System of Human Rights*. Clarendon Press Oxford, 1998, p. 424.

16 En el último informe presentado por el panel de personas expertas para supervisar la elección de comisionados y comisionadas de 2017, se retomó el impacto que el primer informe (de 2015) tuvo: “[e]l Informe de 2015 favoreció que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instruyera a su Consejo Permanente, por medio de la resolución AG/RES.2887 (XL VI-O/16), a invitar a todos los candidatos propuestos a la Comisión o a la Corte para que presenten públicamente ante el Consejo, su visión, sus propuestas e iniciativas, en el caso de ser elegidos. Además, instó a los Estados a “nominar y elegir personas que aseguren una membresía que proporcione equilibrio en términos de género, representación de las diferentes regiones, grupos de población y sistemas legales del hemisferio, garantizando al mismo tiempo las exigencias de independencia, imparcialidad y competencia reconocida en el campo de los derechos humanos”. Ver Cejil. *Informe final del panel independiente para la elección de comisionados y comisionadas para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos*. Junio, 2017.

17 En este punto es importante señalar que la propia Corte IDH ha mencionado “que la cuestión de asegurar la señalada representatividad de los jueces escapa a las facultades de la Corte, pues ello corresponde a otros órganos de la OEA. En todo caso, debe recordarse que los jueces del Tribunal, a pesar de ser nominados por los Estados, ejercen su cargo a título personal [...]” Cfr. Corte IDH. Opinión Consultiva OC-20/09. Artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2009, párr. 65. (énfasis agregado)

18 Diversas Organizaciones de la Sociedad Civil. *Órganos de vigilancia de los tratados de las Naciones Unidas: cuestiones que deben abordarse en el proceso intergubernamental sobre el modo de fortalecer y mejorar el funcionamiento eficaz del sistema de órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos*.

aplicadas de forma análoga al SIDH. Estas sugerencias tienden a garantizar una mayor participación de los propios Estados en la propuesta de candidatos/as que:

[...] cumplan con los requisitos de elegibilidad y que no tengan un cargo de gobierno; diversificar candidatos para no repetir a las mismas personas; publicar ampliamente la vacante; fomentar la participación activa de organizaciones de la sociedad civil en todas las etapas del procedimiento de selección de candidaturas para que, entre otras cosas, dichas organizaciones ayuden al Estado a obtener solicitudes de candidatos o candidatas con excelente preparación y, cuando conozcan a los solicitantes, asesoren al Estado sobre si cumplen los criterios establecidos. [También se debería] revisar el equilibrio geográfico, de género y de diversidad de conocimientos en la composición del comité antes de que tenga lugar cada elección [...].¹⁹

Por su parte, en 2003, Interights publicó un documento relacionado con los procesos de selección de miembros del TEDH, en el que encontró como principales problemas la poca transparencia y la discrecionalidad absoluta de los Estados en relación con el sistema de nominación que adoptan, sumándose a ello tanto la naturaleza politizada del procedimiento de nominación y elección, como la ineficiencia de los distintos órganos políticos involucrados con las elecciones (la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, así como el Comité de Ministros y el Subcomité dependiente del Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos).

A lo anterior se adicionan temas nodales, como la falta de balance de género en la composición de la Corte IDH, el tipo de cabildeo por parte de los Estados (y, ocasionalmente, de los candidatos a la Corte IDH), y la oposición de los Estados para que se fiscalice el proceso de nominación de candidatos/as a nivel interno bajo el argumento falaz de que ello implica una intromisión a su “soberanía”. Todo lo anterior –señala Interights– pone en riesgo la futura independencia (real y aparente) de los jueces, y genera “una corte menos calificada y menos apta para cumplir con su crucial mandato.”²⁰

Por ello, al menos en el sistema europeo de derechos humanos, “como parte de un proceso de reforma en marcha, un panel de personas expertas ha sido establecido para asesorar a los Estados Miembros sobre los candidatos y candidatas nacionales para el puesto de juez/a de la Corte [Europea] antes de que las personas nominadas sean presentadas a la Asamblea Parlamentaria para su escrutinio.”²¹

En conclusión, es fundamental contar con un procedimiento al interior de los países, con reglas bien establecidas, en el que haya participación de distintos actores (Estados, sociedad civil, academia, usuarios del SIDH y otros actores interesados), para debatir la nominación de candidatos y que el mismo continúe durante todo el proceso de selección. Esto resulta vital si se quiere garantizar una composición que cumpla con los requisitos establecidos en la CADH, y que también esté preparado para afrontar adecuadamente los múltiples retos que conlleva la protección de derechos humanos en nuestro continente.

1.1.1.3. *Ser juristas que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales*

De conformidad con el artículo 52.1. de la CADH, cualquier persona que sea propuesta como candidata para integrar la Corte IDH debe ser jurista, y contar con las condiciones para ejercer las más altas funciones judiciales “conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos”. Este es un requisito adicional a los establecidos para ser miembros de la CIDH, quienes no tienen un criterio profesional concreto para ser electos en ese cargo por los Estados miembros de la OEA.

Esto obliga a los Estados no solo a presentar a quienes tengan un título de abogado o licenciado en derecho, sino a quienes, de acuerdo con la legislación local, cumplan con los requisitos “para ejercer las más elevadas funciones judiciales dentro de su país”.

19 *Idem.*

20 Limbach, J. *et al.*, *op. cit.*

21 Miller, V. *The European Court of Human Rights: the election of Judges*. Library of the House of Commons, UK, 4 de mayo de 2011.

Los requisitos antes enunciados son similares a los solicitados en otros tribunales regionales de protección, no obstante, existen diferencias entre ellos, y derivan tanto de la condición de la persona candidata como de las características del tribunal. Por ejemplo, el artículo 11.1. del Protocolo Adicional a la Carta de Bajul establece el requisito de ser jurista y de prestar los servicios a título personal/individual, pero es más amplio en relación con la experiencia profesional, al establecer que la persona debe tener alta autoridad moral y “reconocida competencia y experiencia práctica, judicial o académica, en el campo de los derechos humanos”. Por su parte, los requisitos previstos por la CADH son también similares a los establecidos por el artículo 21 del CEDH, pero el tratado europeo cuenta con un requerimiento adicional a fin de que sus integrantes no se comprometan en ninguna actividad “incompatible con su independencia, imparcialidad, o con las demandas relacionadas con un cargo de tiempo completo [...]”.²²

1.2. Incompatibilidades

El Capítulo IX de la CADH hace referencia a una serie de disposiciones comunes que rigen tanto a la CIDH como a la Corte IDH. En tal sentido, el artículo 71 de la CADH prescribe que “son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembros de la Comisión con otras actividades que pudieren afectar su independencia o imparcialidad conforme a lo que se determine en los respectivos Estatutos.”

Por lo anterior, a fin de tener mayores normas que coadyuven en la garantía de una mayor independencia y autonomía en el ejercicio del cargo de los jueces/zas, el Estatuto de la Corte IDH ha desarrollado los supuestos de las incompatibilidades:

Artículo 18. Incompatibilidades

1. Es incompatible el ejercicio del cargo de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el de los cargos y actividades siguientes:
 - a. los de miembros o altos funcionarios del Poder Ejecutivo; quedan exceptuados los cargos que no impliquen subordinación jerárquica ordinaria, así como los de agentes diplomáticos que no sean Jefes de Misión ante la OEA o ante cualquiera de sus Estados miembros;
 - b. los de funcionarios de organismos internacionales;
 - c. cualesquiera otros cargos y actividades que impidan a los jueces cumplir sus obligaciones, o que afecten su independencia, imparcialidad, la dignidad o prestigio de su cargo.
2. La Corte decidirá los casos de duda sobre incompatibilidad. Si esta no fuere subsanada, serán aplicables las disposiciones del artículo 73 de la Convención y 20.2. del presente Estatuto.
3. Las incompatibilidades únicamente causarán la cesación del cargo y de las responsabilidades correspondientes, pero no invalidarán los actos y resoluciones en que el juez afectado hubiera intervenido.

Las incompatibilidades antes mencionadas deben valorarse, de igual manera, a la luz de lo establecido por el artículo 19 del Estatuto, que establece lo siguiente:

Artículo 19. Impedimento, Excusas e Inhabilitación

1. Los jueces estarán impedidos de participar en asuntos en que ellos o sus parientes tuvieren interés directo o hubieran intervenido anteriormente como agentes, consejeros o abogados, o como miembros de un tribunal nacional o internacional, o de una comisión investigadora, o en cualquier otra calidad, a juicio de la Corte.
2. Si alguno de los jueces estuviere impedido de conocer, o por algún motivo calificado considerare que no debe participar en determinado asunto, presentará su excusa ante el Presidente. Si este no la aceptare, la Corte decidirá.

22 Cfr: Artículos 11.1. del Protocolo Adicional a la Carta de Banjul y 21.3. del CEDH.

3. Si el Presidente considera que alguno de los jueces tiene causal de impedimento o por algún otro motivo calificado no deba participar en determinado asunto, así se lo hará saber. Si el juez en cuestión estuviere en desacuerdo, la Corte decidirá.
4. Cuando uno o más jueces fueren inhabilitados conforme a este artículo, el Presidente podrá solicitar a los Estados partes en la Convención que en una sesión del Consejo permanente de la OEA designen jueces interinos para reemplazarlos.

Las disposiciones antes citadas evidencian la importancia de tener un especial cuidado con las calidades de las personas que ocupan los cargos dentro de ambos órganos de protección del SIDH, en tanto que:

[...] no debe existir ninguna causal que pueda poner en duda la independencia o imparcialidad de quien juzga; por ello no sólo la circunstancia objetiva puede desacreditar la requerida independencia e imparcialidad del órgano jurisdiccional, también puede alegarse el temor y la misma apariencia de parcialidad.²³

1.2.1. Excusas y abstenciones

En la práctica, la excusa de los jueces en distintos casos ha dependido de sus propias valoraciones, y de la necesidad de que tanto en apariencia como por señalamientos objetivos jurídicos, se abstengan del conocimiento de asuntos determinados. Estas inhibiciones se han dado en virtud de distintos supuestos, dentro de los que se pueden mencionar los siguientes:

- Cuando, sin haber participado directamente en el caso, el juez que se excusa es nacional del Estado demandado en el procedimiento ante la Corte IDH,²⁴ aun habiendo sido nombrado como juez *ad hoc*.²⁵ El razonamiento de esa excusa puede reproducirse análogamente retomando lo expresado por el entonces juez Sergio García Ramírez, quien señaló que “el buen desempeño de las funciones jurisdiccionales no reposa solamente en la integridad y capacidad del juez –que son indispensables por supuesto–, sino también en la valoración que se haga sobre aquellas. Ser, pero también parecer [...]”;²⁶

23 Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). *Guía para defensores y defensoras de Derechos Humanos. La protección de los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano*. 2ª ed., Cejil, 2012. Disponible en: <https://www.cejil.org/es/guia-defensores-y-defensoras-derechos-humanos-proteccion-derechos-humanos-sistema-interamericano-2da> (fecha de último acceso 2017/08/18).

24 Esto ha sucedido desde los primeros casos contenciosos resueltos por la Corte IDH. Así, el juez Jorge R. Hernández Alcocer se excusó de conocer los casos: *Velásquez Rodríguez*, *Godínez Cruz* y *Fairén Garbí y Solís Corrales* en contra de Honduras. Con posterioridad, el juez Carlos Vicente de Roux Rengifo se excusó de conocer los casos *Las Palmeras* y *19 comerciantes* en contra de Colombia. El juez Diego García-Sayán ha hecho algo similar en los casos *Gómez Paquiyauri*, *De La Cruz Flores*, *García Asto* y *Ramírez Rojas*, *La Cantuta*, *Cantoral Huamani*, *Caso del Penal Miguel Castro Castro*, *Reverón Trujillo* y *Anzualdo Castro* en contra del Perú. La jueza Cecilia Medina Quiroga también se excusó de conocer los casos *Palamara* y *Almonacid Arellano* y otros en contra de Chile; y el juez Sergio García Ramírez se excusó en los casos *Castañeda Gutman* y *Radilla Pacheco* en contra de México, en el caso *Martín del Campo Dodd*, si bien no se excusó, cedió la Presidencia de la Corte IDH al entonces vicepresidente, Alirio Abreu Bureli.

25 En el caso *Fermín Ramírez vs. Guatemala*, “[e]l 9 de diciembre de 2004 el señor Alejandro Sánchez Garrido, quien había sido designado como juez *ad hoc*, señaló que, en cumplimiento del artículo 19 del Estatuto de la Corte [, tenía] el deber de excusar[se] de conocer [dicho caso como juez *ad hoc*] y solicit[ó] se acept[ara] la [...] excusa”. *Cfr.* Corte IDH. *Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala*. FRC. 2005, párr. 117. Asimismo, en el caso *Mejía Idrovo*, la Corte IDH enfatizó que “[c]uando se notificó la demanda al Estado se le informó sobre su derecho a designar un juez *ad hoc* para que participara en la consideración del caso. El 11 de febrero de 2010 el Estado designó al señor Hernán Salgado Pesantes como juez *ad hoc*. Sin embargo, el 2 de marzo de 2010 el señor Salgado Pesantes informó al Tribunal que al ser consultado por la Procuraduría General del Estado aceptó el cargo, pero posteriormente ‘luego de verificar alguna información concerniente a este caso, [pudo] establecer que el ciudadano demandante reclamó ante el Tribunal Constitucional de Ecuador por la presunta violación de sus derechos y lo hizo en una época en que [él] formaba parte de ese organismo. [Tiene] la seguridad de haber actuado en este caso –como miembro del Tribunal– lo que constituye un impedimento para que pueda participar en este asunto, de conformidad con el artículo 19.1 del Estatuto de la Corte Interamericana””, en consecuencia presentó su excusa para conocer el caso. El 4 de marzo de 2010 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, admitió la referida excusa. Corte IDH. *Caso Mejía Idrovo vs. Ecuador*. EPFRC. 2011, nota al pie 3.

26 En virtud de tales razones, “[m]ediante nota de 9 de mayo de 2008 la Presidenta de la Corte IDH manifestó que

- Por haber conocido el asunto cuando este se tramitaba en otra etapa del procedimiento internacional;²⁷
- Cuando el juez forma parte de la misma organización del representante de las víctimas;²⁸
- Por existir dos jueces de la misma nacionalidad;²⁹
- En casos en los que no se formó parte de la integración de la Corte IDH cuando se deliberó una sentencia previa;³⁰
- Por motivos de fuerza mayor, al no haber participado en el conocimiento completo del caso,³¹ (particularmente en una audiencia pública); y
- Por otras razones cuyos motivos no se desprenden claramente de las sentencias de la Corte IDH.³²

1.2.2. Recusaciones

En lo que respecta a las recusaciones, la propia Corte IDH ha señalado que tal figura “es un instrumento procesal destinado a proteger el derecho a ser juzgado por un órgano imparcial y no un elemento constitutivo o definitorio de dicho derecho”.³³ Asimismo, ha establecido los fines que persigue esta institución:

“compart[ía] en términos generales” la posición del juez García Ramírez y aceptó su excusa.” Corte IDH. *Caso Radilla Pacheco vs. México*. EPFRC. 2009, nota al pie *.

- 27 En el caso de *Maritza Urrutia*, existieron dos excusas, la primera del juez Oliver Jackman quien se abstuvo de participar en la deliberación y firma de la sentencia “por haber participado en varias etapas del caso durante su trámite ante la CIDH, cuando era miembro de esta” y, por el secretario adjunto Pablo Saavedra Alessandri quien se excusó de participar por haber actuado como asistente de la CIDH en el caso, antes de desempeñar su cargo como Secretario de la Corte.” Cfr. Corte IDH. *Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala*. FRC. 2003, notas al pie * y **, respectivamente. Cabe señalar que el secretario de la Corte IDH también se excusó de participar en otro caso contra Colombia. Cfr. Corte IDH. *Caso Las Palmeras vs. Colombia*. F. 2001, nota al pie**.
- 28 La sentencia del caso *Reverón Trujillo*, estableció lo siguiente: “[e]l 9 de mayo de 2008 el juez Diego García-Sayán, de nacionalidad peruana, solicitó a la Presidenta que aceptara su excusa para participar en el [...] caso porque es integrante de una entidad no gubernamental de la que es parte el señor Ayala Corao, uno de los representantes de la presunta víctima. Informó además que ‘[s]i bien jamás h[a] tratado con el Dr. Ayala Corao, de forma alguna, asuntos o temas vinculados a este caso y que [su] absoluta independencia e imparcialidad para conocer del mismo no se encuentra afectada en lo más mínimo’, este paso resultaría ‘saludable para garantizar que la percepción por las partes y por terceros acerca de la absoluta independencia e imparcialidad del Tribunal no se vea afectada’. La Presidenta consideró que no se desprendía que el juez García-Sayán ‘hubiese participado de alguna manera, cualquiera que esta fuese, en el [...] caso o que hubiese manifestado pública o privadamente puntos de vista acerca del litigio en curso, sus causas, manifestaciones y posibles soluciones, o bien, en torno a quienes actúan en este con calidad de partes’”. Sin embargo, en consulta con los demás jueces y de conformidad con el artículo 19 del Estatuto y 19 del Reglamento –ambos de la Corte IDH vigentes al momento de los hechos–, estimó razonable acceder al planteamiento del juez García-Sayán y, consecuentemente, aceptó su excusa. La excusa del juez García-Sayán y la decisión de la presidenta fueron notificadas a las partes el 12 de mayo de 2008. Ver Corte IDH. *Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela*. EPFRC. 2009, nota al pie 1.
- 29 En el caso *Lori Berenson Mejía*, el juez Diego García-Sayán, de nacionalidad peruana, se excusó de conocer el caso “de conformidad con los artículos 19.2. del Estatuto y 19 del Reglamento de la Corte, y además por haber sido designado un juez *ad hoc* desde octubre de 2002. Asimismo, si bien el juez *ad hoc* Juan Federico D. Monroy Gálvez no participó en la deliberación de la [...] Sentencia en la sede del Tribunal en San José, Costa Rica, fue consultado por la Corte sobre el criterio [adoptado] y estuvo de acuerdo con la decisión del Tribunal.” Cfr. Corte IDH. *Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú*. Demanda de Interpretación de la Sentencia de FRC. 2005, nota al pie *.
- 30 Tal es el caso del juez Hernán Salgado Pesantes. Ver, Corte IDH. *Caso Ivcher Bronstein vs. Perú*. Competencia. 1999. Corte IDH. *Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú*. Competencia. 1999. Corte IDH. *Caso Cesti Hurtado vs. Perú*. F. 1999.
- 31 Este es el caso de los jueces Oliver Jackman en el caso *Loayza Tamayo* (interpretación de sentencia), Máximo Pacheco en el caso *19 comerciantes*, Cecilia Medina Quiroga en el caso de las *hermanas Serrano Cruz* (interpretación de la sentencia), y Leonardo A. Franco en el caso *Radilla Pacheco*.
- 32 Por ejemplo, el juez Diego García-Sayán se ha excusado de conocer de los casos salvadoreños *Hermanas Serrano Cruz* y *García Prieto*, así como de los venezolanos *Ríos* y *Perozo*, sin que quede claro en la sentencia si tuvo conocimiento directo de los casos a partir de cargos previos (por ejemplo, por ser integrante del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desaparición Forzada de Personas), o por el trabajo que hizo en terreno con posterioridad a conflictos armados (por ejemplo, como integrante de la Comisión de Verificación de los Acuerdos de Paz en El Salvador). En un caso similar se encuentra la situación de la jueza Cecilia Medina Quiroga, quien se excusó de conocer del caso *Ricardo Canese*.
- 33 Corte IDH. *Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”)* vs. *Venezuela*. EPFRC.

[...] la recusación tiene un doble fin: por un lado actúa como una garantía para las partes en el proceso, y por el otro, busca otorgar credibilidad a la función que desarrolla la Jurisdicción. En efecto, la recusación otorga el derecho a las partes de instar a la separación de un juez cuando, más allá de la conducta personal del juez cuestionado, existen hechos demostrables o elementos convincentes que produzcan temores fundados o sospechas legítimas de parcialidad sobre su persona, impidiéndose de este modo que su decisión sea vista como motivada por razones ajenas al Derecho y que, por ende, el funcionamiento del sistema judicial se vea distorsionado. La recusación no debe ser vista necesariamente como un enjuiciamiento de la rectitud moral del funcionario recusado, sino más bien como una herramienta que brinda confianza a quienes acuden al Estado solicitando la intervención de órganos que deben ser y aparentar ser imparciales.³⁴

Por la forma en que se han dado y resuelto las excusas y abstenciones para el conocimiento de los asuntos señalados en la sección anterior, la experiencia y actuación de la Corte IDH –como cuerpo colegiado encargado de resolver las recusaciones–, han sido prácticamente nulas, aunque las partes en el proceso han hecho uso de este derecho en distintas oportunidades,³⁵ especialmente cuando tenía como objetivo cuestionar el nombramiento de un juez *ad hoc*.

No obstante ello, la Corte IDH ha empezado a tener precedentes interesantes. En el caso de *Radio Caracas Televisión*, el Estado presentó como una de las excepciones preliminares una recusación a varios jueces y al secretario de la Corte IDH. En la sentencia de fondo, la Corte IDH hizo una síntesis de los hechos y se refirió brevemente a lo resuelto:

El día 6 de febrero de 2014 la Corte emitió una Resolución [...] en la que, *inter alia*, decidió respecto a la llamada “excepción preliminar” presentada por el Estado en cuanto a la recusación de dos de los jueces y del Secretario de la Corte, que “las alegaciones de falta de imparcialidad en las funciones que desempeñan algunos de los jueces integrantes de la Corte presentada[s] como excepción preliminar no tiene[n] tal carácter”. Asimismo, consideró “infundada la alegación de falta de imparcialidad formulada [...] en relación con los jueces Diego García-Sayán y Manuel Ventura Robles, quienes no [incurrieron] en ninguna de las causales estatutarias de impedimento ni realizado acto alguno que permita cuestionar su imparcialidad”, y declaró “improcedentes e infundados los alegatos [...] referidos a la supuesta falta de imparcialidad de Pablo Saavedra Alessandri, Secretario del Tribunal.”³⁶

La resolución a la que alude la sentencia abunda en las alegaciones del Estado venezolano al estimar que la Corte IDH carecía de imparcialidad para el juzgamiento de ese caso. Ello, en virtud de lo siguiente:

El Estado venezolano consideró que los jueces que pretend[ía]n juzgarlo, “t[enían] y pose[ían] un interés directo en el [...] caso”. Fundamentó su recusación en el presente caso en la deliberación privada del Tribunal inmediatamente posterior a la audiencia pública del caso *Usón Ramírez vs. Venezuela*, celebrada el 1 de abril de 2009, en el XXXVIII Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte, en Santo Domingo, República Dominicana, de cuyo contenido se enteró cuando, por error, se le entregó un disco compacto que contenía no solo la grabación de la audiencia pública, sino también la de la deliberación privada. A juicio del Estado, las manifestaciones realizadas en esa deliberación privada por los jueces mencionados, la valoración de las pruebas presentadas por el Estado con base en la audiencia pública, y el supuesto hecho de que

2008, párr. 64.

34 *Ibidem*, párr. 62.

35 *Ver*, *inter alia*, Corte IDH. *Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia*. RC. 1997. Corte IDH. *Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá*. FRC. 2001. Corte IDH. *Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala*. FRC. 2003. Corte IDH. *Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana*. [Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas] 2005. Corte IDH. *Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú*. FRC. 2006. Corte IDH. *Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala*. EPFRC. 2010.

36 Corte IDH. *Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela*. EPFRC. 2015, párr. 6.

la Corte haya ignorado los acontecimientos políticos ocurridos durante los años 2002, 2003 y 2004 en Venezuela demuestra[ban] “la falta de imparcialidad de es[a] instancia internacional”.³⁷

La Corte IDH determinó que:

[...] no se ha[bía] configurado ninguna de las causales de impedimento previstas en el párrafo 1 del artículo 19 del Estatuto [de la Corte IDH], pues de [los hechos] no se desprend[ía] que ninguno de los jueces mencionados por el Estado (ni el Secretario de la Corte) t[uviera] n un interés directo en el asunto *sub judice* o h[ubiera]n tenido intervención en la atención de este, bajo diversos conceptos, con anterioridad a la presentación del caso ante la Corte, ni que exist[iera] algún motivo calificado” que justifi[cara] la abstención.³⁸

Asimismo, señaló que las deliberaciones forman parte de un proceso interno que finaliza con la emisión de la correspondiente sentencia:

La Corte, como todo cuerpo colegiado, tiene un proceso interno de elaboración de sus decisiones en el cual cada uno de sus miembros formulan comentarios preliminares, sujetos a mayor análisis, pendientes de las pruebas o las argumentaciones que las partes aporten después de la audiencia y siempre sujetas a la deliberación formal y final que hagan los jueces en una sesión específica que se celebra tiempo después de la audiencia, una vez que se han reunido los elementos de juicio para considerar un proyecto de sentencia y emitir esta, analizando, en particular, los alegatos finales escritos de las partes.³⁹

Ninguna de las opiniones expresadas en dicha deliberación privada revela una falta de imparcialidad o permite inferir la existencia de una predisposición en contra del Estado. Ninguna de tales opiniones trasunta una inclinación distinta a la que corresponde a una opinión jurídica razonada y fundamentada.⁴⁰

A partir de ello, la Corte IDH concluyó que “los jueces Diego García-Sayán y Manuel Ventura Robles no ha[bía]n incurrido en ninguna de las causales estatutarias de impedimento ni ha[bía]n realizado acto alguno que permit[iera] cuestionar su imparcialidad.”⁴¹ En el caso del secretario de la Corte IDH, estimó improcedente el argumento del Estado pues aquel “no t[enía] la calidad de juez ni t[enía] facultades decisorias en los casos comprendidos en la jurisdicción de la Corte”.⁴²

Más allá de las cuestiones relacionadas con el cuidado de la información reservada, el precedente que abrió Venezuela al cuestionar directamente a diversos integrantes de la Corte IDH es relevante, en tanto cualquier funcionario público puede, y debe, ser sujeto de escrutinio, máxime cuando es una autoridad judicial. Evidentemente, para que proceda, ese cuestionamiento legítimo debe partir de bases objetivas sólidas, a fin de que esa prerrogativa prevista en el Reglamento de la Corte IDH surta los efectos para los cuales fue creada, y no trascienda a otros ámbitos más allá del estrictamente jurídico.

1.3. El plazo para la inscripción de candidatos y la responsabilidad en la elección de los integrantes

El Estatuto de la Corte IDH detalla el procedimiento para la elección de jueces, el cual inicia cuando el Secretario General de la OEA pide a los Estados partes de la Organización que presenten a uno o varios candidatos. Este anuncio debe hacerse seis meses antes de la celebración de la Asamblea General de la OEA, en la que se suplirán las vacantes de los jueces cuyo mandato esté próximo a vencer,

37 Corte IDH. *Caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela*. Resolución de 6 de febrero de 2014, párr. 18.

38 *Ibidem*, párr. 18.

39 *Ibidem*, párr. 21.

40 *Ibidem*, párr. 22, *in fine*.

41 *Ibidem*, párr. 23.

42 *Ibidem*, párr. 25, *in fine*.

eligiéndose de entre los candidatos que sean presentados.⁴³ Luego de ello, cuando menos noventa días antes de la celebración de la Asamblea General, los Estados deberán presentar a sus respectivos candidatos (que, como establece el artículo 53.2. pueden ser hasta tres) y, en caso de proponerse una terna, se respetará la cláusula convencional que prevé que al menos una de esas personas debe ser nacional del Estado proponente.

Una vez recibidas las candidaturas, el Estatuto establece que la Secretaría General comunicará a los Estados partes las mismas, mediante una lista en orden alfabético.⁴⁴ Finalmente, el artículo 8.3. del Estatuto de la Corte IDH establece que “[c]uando se trate de vacantes en la Corte, así como en casos de muerte o incapacidad permanente de un candidato, los plazos anteriores se reducirán prudencialmente, a juicio del Secretario General de la OEA”.

En relación con la elección propiamente dicha, el artículo 9 del Estatuto establece las reglas a seguir:

Artículo 9. Votación 1. La elección de los jueces se realiza en votación secreta y por mayoría absoluta de los Estados partes en la Convención, de entre los candidatos a que se refiere el artículo 7 del presente Estatuto. 2. Entre los candidatos que obtengan la citada mayoría absoluta, se tendrán por electos los que reciban mayor número de votos. Si fueran necesarias varias votaciones, se eliminarán sucesivamente los candidatos que obtengan menor número de votos, conforme lo determinen los Estados parte.

El respeto del plazo, así como la rigidez en el acatamiento del proceso de elección, es un aspecto que ha sido tomado con seriedad por parte de la Secretaría General de la OEA y los Estados partes de la CADH. Por lo general, la primera publicita en su sitio web los distintos registros de candidaturas tanto para la CIDH como para la Corte IDH, así como para cualquier otro órgano de la OEA que deba tener un aval de la Asamblea General o de los Estados que forman parte del tratado.

1.4. Periodo para ejercer el mandato

Las reglas previstas por el artículo 54 de la CADH tienen un mayor desarrollo tanto en el Estatuto,⁴⁵ como en el Reglamento de la Corte IDH, lo cual es sustancial en tanto que no es excepcional que los jueces deban conocer de distintos asuntos que, en principio, se entendían como resueltos.

Un ejemplo de lo anterior, tiene que ver con la participación de los jueces que han dejado su encargo cuando alguna de las partes en el proceso presenta una solicitud de interpretación de sentencia. Tal fue el caso del entonces juez Antônio Augusto Cançado Trindade quien, después de haber finalizado su periodo como juez de la Corte IDH, volvió a participar en la deliberación de las solicitudes de interpretación de sentencia presentadas por Perú en los casos de *La Cantuta* y de los *Trabajadores Cesados del Congreso*.⁴⁶

43 Cfr: Art. 8.1. del Estatuto de la Corte IDH.

44 Cfr: Art. 8.2. del Estatuto de la Corte IDH. Tal disposición también prevé que el secretario general hará del conocimiento de los Estados partes la lista mencionada “de ser posible, por lo menos treinta días antes del próximo periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA”.

45 El artículo 5 del Estatuto de la Corte IDH (modificado mediante resolución AG/RES.625 (XII-O/82) de la Asamblea General de la OEA de noviembre de 1982), establece lo siguiente: “[a]rtículo 5. Mandato de los jueces: 1. Los jueces de la Corte son electos para un mandato de seis años y sólo pueden ser reelectos una vez. El juez electo para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, completará tal mandato. 2. Los mandatos de los jueces se contarán a partir del primero de enero del año siguiente al de su elección y se extenderán hasta el 31 de diciembre del año en que se cumplan los mismos. 3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato. Sin embargo, seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no serán sustituidos por los nuevos jueces elegidos”.

46 Cfr: Corte IDH. *Caso La Cantuta vs. Perú*. Interpretación de la Sentencia de FRC. 2007. Corte IDH. *Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú*. Solicitud de Interpretación de la Sentencia de EPFRC. 2007.

2. Jueces nacionales de casos sometidos a la Corte IDH y jueces *ad hoc* (artículo 55 de la CADH)

Artículo 55

1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados partes en el caso sometido a la Corte, conservará su derecho a conocer del mismo.
2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de uno de los Estados partes, otro Estado parte en el caso podrá designar a una persona de su elección para que integre la Corte en calidad de juez *ad hoc*.
3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionalidad de los Estados partes, cada uno de éstos podrá designar un juez *ad hoc*.
4. El juez *ad hoc* debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52.
5. Si varios Estados partes en la Convención tuvieran un mismo interés en el caso, se considerarán como una sola parte para los fines de las disposiciones precedentes. En caso de duda, la Corte decidirá.

La figura del juez *ad hoc* fue muy controversial hasta que la Corte IDH emitió una opinión consultiva –a solicitud del gobierno argentino–, en la que se refirió a los dos supuestos en los cuales se inscribió la consulta: por una parte, a la figura del juez *ad hoc* y, por la otra, a la prerrogativa que tiene un juez nacional de un Estado demandado de seguir conociendo de un asunto en contra de este.

En relación con el primer tema sometido a consulta, la Corte IDH determinó reservar la figura del juez *ad hoc* solo para los casos de denuncias entre Estados,⁴⁷ explicando que del “sentido corriente de la expresión ‘alguno de los Estados partes en el caso’”, referida en el artículo 55.1. de la CADH, se desprende la aplicación de esta disposición a la hipótesis de participación de más de un Estado parte en una controversia, es decir, a casos contenciosos originados en comunicaciones interestatales.⁴⁸ Asimismo, la Corte IDH determinó que:

[...] la intervención del juez *ad hoc* no debe ser extendida a aquellos procedimientos para los cuales no está expresamente prevista [...]. De esta manera, al tiempo que el Tribunal asegura la protección de los derechos reconocidos por la Convención Americana garantiza, además, tanto a los Estados partes que han reconocido la competencia de la Corte como a las presuntas víctimas, el estricto respeto de sus normas de carácter procesal, conforme al sentido y alcance de las mismas [...].⁴⁹

47 El artículo 45 de la CADH establece la posibilidad de presentar denuncias interestatales. Hasta el momento, solo han sido presentadas dos de ellas ante la CIDH, pero ninguna ha sido sometida a la Corte IDH. La primera petición interestatal –presentada por Nicaragua en contra de Costa Rica– fue desestimada por la CIDH, *ver* CIDH. Informe n.º 11/07, Caso Interestatal 01/06, *Nicaragua vs. Costa Rica*, 8 de marzo de 2007. La segunda petición derivó de una demanda de Ecuador respecto de Colombia por la alegada ejecución extrajudicial del ciudadano ecuatoriano Franklin Guillermo Aisalla Molina por agentes colombianos en el marco de la “Operación Fénix”, en la cual se realizó un bombardeo a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ubicado en la municipalidad fronteriza de Lago Agrio entre Ecuador y Colombia. Este caso fue declarado admisible, *ver* CIDH. Informe n.º 112/10, Petición Interestatal, PI-02, admisibilidad. *Franklin Guillermo Aisalla Molina Ecuador- Colombia*, 21 de octubre de 2010. Para un mayor análisis sobre estos dos casos, *ver* la sección 2 ‘Comunicaciones interestatales’ del comentario a los artículos 44-47 sobre la Competencia de la CIDH a cargo de Tojo.

48 *Cfr.* Corte IDH. Opinión Consultiva OC-20/09, *op. cit.*, párr. 174.

49 *Ibidem*, párr. 39.

Por otra parte, respecto del segundo tema a consulta, la Corte IDH inició su razonamiento desechando el argumento de que:

[...] la sola nacionalidad del juez que deba conocer de un caso contencioso originado en una petición individual contra el Estado del cual ostenta dicha nacionalidad no es una cualidad que, por sí misma y *a priori*, pueda suscitar sospechas sobre su carencia de imparcialidad o sobre su falta de independencia.⁵⁰

Empero, una vez establecido lo anterior, hizo un recuento de la práctica judicial interamericana, así como un análisis comparativo de lo que ocurre en órganos de similar naturaleza:

[...] la Corte advierte que en la gran mayoría de casos que se han elevado a su conocimiento alguno de los jueces titulares ha ostentado la nacionalidad del Estado demandado y que desde sus primeros casos [...] aquellos han entendido como una facultad el participar o no en cualquier tipo de controversia. No obstante, en un gran número de casos contenciosos sometidos por la Comisión Interamericana, los jueces titulares, se han inhibido de participar cuando han ostentado la nacionalidad del Estado demandado. Esta tendencia se ha reforzado en los últimos años [...], lo que revela un creciente consenso en cuanto a que los jueces nacionales no deben participar en el conocimiento de estos casos.⁵¹

Por todo lo anterior, la Corte IDH concluyó en la parte resolutive de la opinión consultiva:

1. Que conforme al artículo 55.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la posibilidad de los Estados partes en el caso sometido a la Corte Interamericana, de nombrar un juez *ad hoc* para que integre e[ll] Tribunal cuando en el mismo no hubiere un juez de su nacionalidad, se restringe a aquellos casos contenciosos originados en comunicaciones interestatales (artículo 45 de dicho instrumento), y que no es posible derivar un derecho similar a favor de los Estados partes en casos originados en peticiones individuales (artículo 44 de dicho tratado).
2. Que el juez nacional del Estado demandado no debe participar en el conocimiento de casos contenciosos originados en peticiones individuales.⁵²

El actual Reglamento de la Corte IDH fue modificado para reflejar el precedente jurisprudencial en su propia normativa interna, así el artículo 20 de este cuerpo normativo se titula “Jueces *ad hoc* en casos interestatales”.⁵³

50 *Ibidem*, párr. 81.

51 *Ibidem*, párr. 82.

52 *Ibidem*, resolutivos 1 y 2.

53 Tal disposición establece lo siguiente: “[a]rtículo 20. Jueces *ad hoc* en casos interestatales. 1. Cuando se presente un caso previsto en el artículo 45 de la Convención, la Presidencia, por medio de la Secretaría, advertirá a los Estados mencionados en dicho artículo la posibilidad de designar un juez *ad hoc* dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la demanda. 2. Cuando apareciere que dos o más Estados tienen un interés común, la Presidencia les advertirá la posibilidad de designar en conjunto un juez *ad hoc* en la forma prevista en el artículo 10 del Estatuto. Si dentro de los 30 días siguientes a la última notificación de la demanda, dichos Estados no hubieren comunicado su acuerdo a la Corte, cada uno de ellos podrá proponer su candidato dentro de los 15 días siguientes. Pasado ese plazo, y si se hubieren presentado varios, la Presidencia escogerá por sorteo un juez *ad hoc* común y lo comunicará a los interesados. 3. Si los Estados interesados no hacen uso de su derecho dentro de los plazos señalados en los párrafos precedentes, se considerará que han renunciado a su ejercicio. 4. El Secretario comunicará a la Comisión Interamericana, a los representantes de la presunta víctima y, según el caso, al Estado demandante o al Estado demandado la designación de jueces *ad hoc*. 5. El juez *ad hoc* prestará juramento en la primera sesión dedicada al examen del caso para el cual hubiese sido designado. 6. Los jueces *ad hoc* percibirán emolumentos en las mismas condiciones previstas para los jueces titulares”.

3. El funcionamiento de la Corte IDH (artículo 56 de la CADH)

Artículo 56

El quórum para las deliberaciones de la Corte IDH es de cinco jueces.

La disposición citada tiene una réplica idéntica en el artículo 14 del reglamento vigente. Hasta el momento, la Corte IDH no se ha encontrado en alguna situación en la que deba poner en práctica el supuesto previsto por la disposición citada. En algunas oportunidades, se ha contado con la participación de seis jueces en virtud de la excusa o recusación de alguno de ellos, o por la ausencia derivada de cuestiones de fuerza mayor o de salud de alguno de sus miembros.

No obstante, dado que el reglamento la faculta para ello y ante el incremento de mayores asuntos y casos que le son presentados, la Corte IDH ha empezado a ‘dividirse’ con el fin de desahogar los asuntos. Este reparto es usado particularmente en las audiencias privadas de supervisión de sentencias, conformándose en una especie de cámaras al estilo del TEDH.⁵⁴

4. Rol y facultades de la CIDH en los procedimientos ante la Corte IDH (artículo 57 de la CADH)

Artículo 57

La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte IDH.

Una de las cuestiones más importantes en que han impactado las reformas reglamentarias de la Corte IDH, se refiere al rol de la CIDH en los casos que le son sometidos. Esta discusión se planteó desde las reformas reglamentarias de 2000 y, paulatinamente, se ha plasmado en los distintos reglamentos y posteriores modificaciones normativas adoptadas por la Corte IDH.

Durante las décadas de los 80 y 90, la CIDH contaba con una amplia discreción para decidir los casos que sometía a la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH; en esta época las presuntas víctimas no eran parte con legitimación activa en el proceso, por lo que su rol era periférico. Las más recientes reformas reglamentarias de la Corte IDH, y su propia práctica, otorgan a la CIDH una menor intervención ante la Corte IDH, lo cual se ha visto reflejado en la participación que tiene en el proceso contencioso (particularmente en la presentación de prueba y en las audiencias públicas), así como en la sustitución de la instancia interamericana por una nueva figura, denominada ‘defensor interamericano’.

De hecho, la participación de la CIDH en el proceso contencioso sigue restringiéndose conforme se realizan reformas al Reglamento de la Corte IDH. La exposición de motivos de las últimas reformas reglamentarias detalla precisamente que el rol de la CIDH fue la principal modificación realizada a la normativa en comento:

La principal reforma que el nuevo Reglamento introduce es el papel de la Comisión en el procedimiento ante la Corte. Respecto a este tema los diferentes actores del sistema que

54 El artículo 6 del Reglamento de la Corte IDH prevé la conformación de una comisión permanente, así como cualquiera otra que se estime pertinente para asuntos específicos.

participaron en esta consulta se refirieron a la conveniencia de modificar algunos aspectos de la participación de la Comisión en el procedimiento ante la Corte, *otorgando más protagonismo al litigio entre los representantes de las víctimas o presuntas víctimas y el Estado demandado, permitiendo así que la Comisión [ju]gara] más un papel de órgano del sistema interamericano afianzando, así, el equilibrio procesal entre las partes.*

Coincidieron en la pertinencia de que el inicio del procedimiento ante la Corte IDH se realice mediante la presentación del informe al que se refiere el artículo 50 de la Convención. En este sentido, en el [Reglamento], conforme al artículo 35, la Comisión ya no inicia el procedimiento con la presentación de una demanda, sino con la remisión de su informe de fondo, emitido conforme al artículo 50 de la Convención. *Al enviar este informe, la Comisión debe presentar los fundamentos que la llevaron a someter el caso a la Corte.* Además, a diferencia del anterior Reglamento, la Comisión no podrá ofrecer testigos y declaraciones de presuntas víctimas y, de acuerdo al mencionado artículo, sólo en ciertas circunstancias podrá ofrecer peritos. Asimismo, en los casos en los que se realice audiencia, la Comisión será la que inicie la misma, exponiendo los motivos que la llevaron a presentar el caso. Los interrogatorios podrán ser hechos por los representantes de las presuntas víctimas y los del Estado. La Comisión podrá interrogar a los peritos en la situación prevista en el artículo 52. Al cerrar la etapa de alegatos, regulada en el artículo 51.7., la Comisión expondrá sus observaciones finales, como así queda establecido en el numeral 8 del mismo artículo. Cabe resaltar que este nuevo procedimiento fue detalladamente considerado con la Comisión.⁵⁵

De hecho, la reforma reglamentaria también deja a discreción de la CIDH la presentación de alegatos finales escritos y, en general, supedita su participación cuando exista una cuestión que pueda “afectar el orden jurídico interamericano”.⁵⁶

La restricción de la participación de la CIDH obedecía particularmente a una demanda de los Estados sobre la igualdad procesal en tanto se alegaba que, a diferencia de ellos, en cualquier litigio, eran dos partes (víctimas y CIDH) las que presentaban alegatos y pruebas para demostrar la responsabilidad estatal, lo cual no garantizaba un debido balance.⁵⁷

No obstante los actuales rol y facultades de la CIDH en los procedimientos ante la Corte IDH, ese órgano sigue siendo la instancia que remite los casos y delimita los hechos de la disputa materia de análisis por la Corte IDH. Estos aspectos los analizaremos más adelante.⁵⁸

El litigio ante la Corte IDH es cada vez más especializado y pocas veces las víctimas, o los propios defensores públicos interamericanos, tienen la capacidad de conocer al detalle los criterios, jurisprudencia y procedimiento adicional al establecido en el Reglamento (por ejemplo, algunos plazos relacionados con la resolución de convocatoria a audiencia, de solicitud de prueba para mejor resolver, etc.). De igual manera, pocas víctimas y sus representantes (salvo quienes sean usuarios habituales del SIDH) pueden entender la afectación que el litigio de un caso puede tener sobre otros más. En ese sentido, la participación activa de la CIDH puede ser fundamental para insistir en la coherencia de los fallos y decisiones que emita la Corte IDH.

55 Corte IDH. Exposición de motivos de la reforma reglamentaria, p. 2. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/sitios/reglamento/nov_2009_motivos_esp.pdf (fecha de último acceso: 2017/06/25).

56 Por ejemplo, el literal f del artículo 35 del Reglamento (relativo al sometimiento del caso por parte de la CIDH), parecería restringir a que solo “cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano de los derechos humanos, [hará una] eventual designación de peritos, indicando el objeto de sus declaraciones y acompañando su hoja de vida”.

57 Si bien las valoraciones de los Estados eran ciertas en términos numéricos estrictamente, valdría la pena hacer un análisis más detallado puesto que en diversas ocasiones las víctimas no coinciden con los alegatos presentados por la CIDH y, más aún, el alegato de los Estados parte del falso supuesto de una igualdad entre las partes, la cual rara vez se da en los litigios de derechos humanos, en tanto los Estados tienen mayores recursos y poder, en relación con las víctimas.

58 Ver los comentarios a los artículos 44-47 sobre la Competencia de la CIDH, y la sección 3 ‘Procedimiento de fondo’ de los comentarios a los artículos 48-51 sobre el Procedimiento ante la CIDH, todos a cargo de Tojo.

5. Sede de la Corte IDH (artículo 58 de la CADH)

Artículo 58

1. La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea General de la Organización, los Estados partes en la Convención, pero podrá celebrar reuniones en el territorio de cualquier Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos en que lo considere conveniente por mayoría de sus miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo. Los Estados partes en la Convención pueden, en la Asamblea General por dos tercios de sus votos, cambiar la sede de la Corte.
2. La Corte designará a su Secretario.
3. El Secretario residirá en la sede de la Corte y deberá asistir a las reuniones que ella celebre fuera de la misma.

5.1. Sede ordinaria

Una vez que se lograron las once ratificaciones requeridas para la entrada en vigor de la CADH, la Asamblea General de la OEA resolvió “[r]ecomendar que la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [fuera] establecida en su oportunidad en Costa Rica”.⁵⁹ Dicha resolución fue reafirmada por el artículo 3 del Estatuto de la recién establecida Corte IDH, el cual establecía lo siguiente:

Artículo 3. Sede

1. La Corte tendrá su sede en San José, Costa Rica; sin embargo, podrá celebrar reuniones en cualquier Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en que lo considere conveniente por mayoría de sus miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo.
2. La sede de la Corte puede ser cambiada por el voto de los dos tercios de los Estados partes en la Convención, en la Asamblea General de la OEA.

Desde 1979, la Corte IDH ha tenido asiento en San José, Costa Rica, para lo cual se firmó un convenio con el Gobierno de ese país,⁶⁰ con el fin de dejar claramente establecidos los compromisos que asumía el país al permitir la instalación y funcionamiento regular de la Corte IDH en su territorio.⁶¹

59 OEA. Asamblea General. Sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resolución AG/RES.372 (VII-0/78), aprobada en la séptima sesión plenaria celebrada el 1 de julio de 1978.

60 El artículo 27 del Estatuto regula la necesidad de formalizar la relación con el país anfitrión de la sede de la Corte IDH: “[a]rtículo 27. Relaciones con el País Sede, con Estados y Organismos. 1. Las relaciones de la Corte con el país sede serán reglamentadas mediante un acuerdo con el país sede. La sede de la Corte tendrá carácter internacional. 2. Las relaciones de la Corte con los Estados, con la OEA y sus organismos y con otros organismos internacionales gubernamentales relacionados con la promoción y defensa de los derechos humanos, serán reguladas mediante acuerdos especiales”.

61 Convenio de sede entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que incluye el régimen de inmunidades y privilegios de la Corte, sus jueces, su personal y las personas que comparezcan ante ella. Publicado en *La Gaceta* mediante Ley n.º 6889, 2 de septiembre de 1983. Disponible en: <http://www.corteidh.or.cr/docs/otros/convenio.pdf> (fecha de último acceso: 2017/06/25). En adelante ‘Convenio Sede’. Con relación a la sede de la CIDH y de la OEA en los Estados Unidos de América, es importante recordar que durante el “Proceso de fortalecimiento del SIDH”, diversos países propusieron el posible cambio de sede tanto de la OEA como de la CIDH a otro país, entre los que se mencionaron: Argentina, Panamá o Costa Rica. Si bien esta discusión no pasó de un debate dentro del proceso de fortalecimiento, en su momento fue muy importante, ya que evidenciaba las críticas a la falta de congruencia en tener tanto la sede de la CIDH como de la OEA en un país que no había ratificado los instrumentos del SIDH.

En tal documento (conocido como Convenio Sede), se prevén cuestiones relacionadas con la personería jurídica y la organización de la Corte IDH (capítulo I); la capacidad legal, privilegios e inmunidades de la Corte IDH (capítulo II); las inmunidades y privilegios tanto de sus jueces (capítulo III) como del secretariado (capítulo IV) y del personal del tribunal (capítulo V). El instrumento también incluye “prerrogativas de cortesía diplomática” (capítulo VI), un capítulo sobre cuestiones migratorias (capítulo VII), y establece criterios sobre la contribución que hará el país al funcionamiento de la Corte IDH.⁶² Finalmente, el Convenio Sede reitera las inmunidades que se darán a las personas que comparecen ante la Corte IDH (Capítulo XXX), y de manera especialmente relevante, en el último apartado, se reconoce el mismo rango de obligatoriedad entre las decisiones de las autoridades costarricenses con “[l]as resoluciones de la Corte y, en su caso, de su Presidente [...]”.⁶³

5.2. Sede extraordinaria

Desde hace varios años, la Corte IDH empezó a celebrar sesiones fuera de su sede en San José, lo cual se ha convertido en una práctica constante de la Corte IDH.⁶⁴ El objetivo de tales actividades es acercar más su funcionamiento a las personas que rara vez tenían acceso a su procedimiento (aunque hoy en día las tecnologías de la información y la voluntad de la Corte IDH han facilitado que las audiencias se puedan presenciar a través de su sitio web). La maduración de la idea inicial se narra de la siguiente manera:

En el año 2004 la Corte Interamericana reflexionaba sobre la evolución que había venido experimentando el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos [...] en general y su trabajo en particular y observaba la necesidad urgente de difundir y acercar más su quehacer a los diferentes actores nacionales de los países sobre los cuales tenía jurisdicción. Entonces el dilema era cómo hacer difusión del Sistema Interamericano en general y de su quehacer en particular en los diversos países, sin olvidar la función primordial a la que está llamada la Corte que es el despacho eficiente de los asuntos que llegan a su conocimiento. Bajo esta disyuntiva es que nació la idea de celebrar periodos extraordinarios de sesiones fuera de la sede, toda vez que esto le permitiría conjugar el despacho de los asuntos bajo su conocimiento y difundir el Sistema Interamericano, en especial su quehacer y jurisprudencia.⁶⁵

La primera sesión con esta modalidad ‘de promoción’ se llevó a cabo en 2005.⁶⁶ Desde entonces, la Corte IDH ha sesionado en, al menos, 15 países del continente americano. Estas audiencias se han venido celebrando en periodos extraordinarios de sesiones –adicionales a los ocho periodos ordinarios en que sesiona la Corte IDH al año– y con el financiamiento de la cooperación europea.⁶⁷

La Corte IDH usa sus periodos extraordinarios de sesiones para tener actividades académicas y para sostener reuniones con distintos funcionarios públicos. Asimismo, una de las reglas que ha mantenido desde el inicio, es que no conocerá ningún asunto relacionado con el país en el que celebra su periodo de sesiones.

62 El artículo 28 del Convenio Sede señala lo siguiente: “[a]rtículo 28. Como contribución del país sede al funcionamiento de la Corte, el Gobierno de la República de Costa Rica: a) [c]ontinuará otorgando una subvención anual no inferior a la ya otorgada a la Corte en el primer año de su funcionamiento, incluida en la Ley de Presupuesto General de la República de Costa Rica para el año 1980. b) Proporcionará a la Corte un local adecuado para su funcionamiento”.

63 Cfr. art. 27 del ‘Convenio Sede’ (eficacia de las resoluciones).

64 En consonancia con el artículo 58 de la CADH, el Reglamento de la Corte IDH señala lo siguiente: “[a]rtículo 13. Sesiones fuera de la sede. La Corte podrá reunirse en cualquier Estado miembro en que lo considere conveniente por mayoría de sus miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo”.

65 Saavedra Alessandri, P. y Pacheco Arias, G. “Las sesiones ‘itinerantes’ de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: un largo y fecundo caminar por América”, en García Ramírez, S. y Castañeda Hernández, M. *Recepción nacional del derecho internacional de los derechos humanos y admisión de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana*. IJ UNAM, SRE, OEA, 2009, pp. 37-38. Disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2740/8.pdf> (fecha de último acceso: 2017/07/05).

66 *Ibidem*, p. 38.

67 *Idem*.

6. La Secretaría de la Corte IDH (artículo 59 de la CADH)

Artículo 59

La Secretaría de la Corte IDH será establecida por esta y funcionará bajo la dirección de su secretario, de acuerdo con las normas administrativas de la Secretaría General de la Organización en todo lo que no sea incompatible con la independencia de la Corte IDH. Sus funcionarios serán nombrados por el secretario general de la Organización, en consulta con el secretario de la Corte IDH.

Tanto el Estatuto como el Reglamento de la Corte IDH⁶⁸ contienen disposiciones específicas en relación con el equipo de la Secretaría de la Corte IDH. El primero de ellos prevé lo siguiente:

Artículo 14. Secretaría

1. La Secretaría de la Corte funcionará bajo la inmediata autoridad del Secretario, de acuerdo con las normas administrativas de la Secretaría General de la OEA, en lo que no sea incompatible con la independencia de la Corte.
2. El Secretario será nombrado por la Corte. Será funcionario de confianza de la misma, de dedicación exclusiva, tendrá su oficina en la sede y deberá asistir a las reuniones que la Corte celebre fuera de la misma.
3. Habrá un Secretario Adjunto que auxiliará al Secretario en sus labores y lo sustituirá en sus ausencias temporales.
4. El personal de la Secretaría será nombrado por el Secretario General de la OEA, en consulta con el Secretario de la Corte.

Asimismo, las atribuciones del Secretario también encuentran fundamento reglamentario en el artículo 10,⁶⁹ y responden a la ejecución de las determinaciones del pleno o la presidencia, así como a las responsabilidades administrativas que se derivan del actuar diario de la Corte IDH.

En la historia de la Corte IDH han fungido tres secretarios en el cargo: Charles Moyer, Manuel Ventura y Pablo Saavedra (quien aún se encuentra en funciones). Aunado a ello, existe una Secretaría adjunta,⁷⁰ (a cargo de Emilia Segares) y un grupo de abogados y abogadas que dan seguimiento permanente al mandato de la Corte IDH, y que pueden asumir la responsabilidad temporal de la Secretaría por encargo previo y en ausencia de los dos primeros (artículo 8.3. del Reglamento). Todas las personas que integran la Secretaría están obligadas a guardar reserva de los asuntos bajo conocimiento de la Corte IDH, para lo cual prestarán juramento ante quien presida la Corte IDH (artículo 9 del Reglamento).

En virtud de que los jueces de la Corte IDH no prestan sus servicios a tiempo completo, el actuar de la Secretaría se torna fundamental. No obstante ello, el Reglamento de la Corte IDH también establece la organización de sus integrantes a fin de que cuente con una presidencia y vicepresidencia que se renuevan cada dos años.⁷¹

68 El Reglamento de la Corte IDH establece el procedimiento de elección tanto del secretario/a como del secretario/a adjunto/a. De igual manera, se prevén las formalidades para su nombramiento y se enlistan sus atribuciones, *ver* Reglamento de la Corte IDH, artículos 7 a 10 (Capítulo II: de la Secretaría).

69 Ese artículo establece lo siguiente: “[a]rtículo 10. Atribuciones del Secretario [...] a. notificar las sentencias, opiniones consultivas, resoluciones y demás decisiones de la Corte; b. llevar las actas de las sesiones de la Corte; c. asistir a las reuniones que celebre la Corte dentro o fuera de su sede; d. tramitar la correspondencia de la Corte; e. certificar la autenticidad de documentos; f. dirigir la administración de la Corte, de acuerdo con las instrucciones de la Presidencia; g. preparar los proyectos de programas de trabajo, reglamentos y presupuestos de la Corte; h. planificar, dirigir y coordinar el trabajo del personal de la Corte; i. ejecutar las tareas que le sean encomendadas por la Corte o por la Presidencia; j. las demás establecidas en el Estatuto o en este Reglamento”.

70 *Cf.*: Artículo 8 del Reglamento.

71 Las atribuciones de ambas se encuentran reglamentadas por los artículos 4 y 5, respectivamente, del Reglamento.

7. Estatuto y Reglamento de la Corte IDH (artículo 60 de la CADH)

Artículo 60

La Corte IDH preparará su Estatuto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y dictará su Reglamento.

La Corte IDH ha tenido seis normas reglamentarias aprobadas en 1980, 1991, 1996, 2000, 2003 y 2009.⁷² La modificación en la normativa de la Corte IDH a lo largo del tiempo refleja su práctica y experiencia en distintos ámbitos.

La evolución del contenido de los cuatro primeros reglamentos de la Corte IDH ha sido explicada de la siguiente manera. El primer Reglamento de la Corte IDH, de 1980, tuvo una marcada influencia del Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, lo cual hacía que “el procedimiento, sobre todo para los casos contenciosos [f]uera particularmente lento”.⁷³ El segundo Reglamento, de 1991, empezó a establecer plazos que debían ser cumplidos por las partes involucradas en un proceso contencioso. Este “[f]ue el inicio de un proceso de racionalización y simplificación del procedimiento”.⁷⁴ El tercer Reglamento, de 1996, modificó algunos plazos del procedimiento contencioso (en atención a las diversas solicitudes de prórroga formuladas por las partes); adicionalmente:

precisó tanto la terminología como la propia estructura del procedimiento ante el Tribunal [...] y p]or primera vez, [...] estableció los momentos procesales para que las partes presentaran la prueba correspondiente a las distintas etapas del procedimiento, dejando a salvo la posibilidad de presentación extemporánea de prueba en casos de fuerza mayor, impedimento grave o hechos supervinientes.⁷⁵

Esta normativa también amplió la facultad de la Corte IDH de solicitar prueba para mejor resolver; incluyó diferentes modalidades de terminación anticipada del procedimiento; y eliminó trámites innecesarios como la convocatoria a audiencia para dar lectura a la sentencia. Empero, sin duda alguna, la modificación más importante se reflejó en la incipiente participación autónoma de las víctimas en la etapa de reparaciones del procedimiento contencioso, cuyos representantes “habían sido, en los últimos años, integrados a la delegación de la Comisión Interamericana con la designación eufemística de ‘asistentes’ de la misma”.⁷⁶

La reforma del cuarto Reglamento, de 2000, se dio después de distintas discusiones tanto técnicas como dentro del marco de la OEA. Esa modificación,

[...] se hizo acompañar de propuestas concretas para perfeccionar y fortalecer el mecanismo de protección bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las alteraciones reglamentarias incidieron en la racionalización de los actos procesales, en materia probatoria y medidas provisionales de protección; pero la modificación de mayor trascendencia consistió en el otorgamiento de participación directa de las presuntas víctimas, sus familiares, o sus representantes, en todas las etapas del procedimiento ante la Corte [...].⁷⁷

Otras reformas introducidas tenían por objeto asegurar una mayor celeridad en el proceso ante la Corte IDH, y fue así, como bajo esta normativa, se unieron las etapas de excepciones preliminares,

72 Los textos completos están disponibles en el siguiente link: <http://www.corteidh.or.cr/index.php/acerca-de/reglamento/reglamento-vigente> (fecha de último acceso: 2017/07/01).

73 Cançado Trindade, A. A. *El futuro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. ACNUR, San José, 2003, p. 33.

74 *Ibidem*, p. 35.

75 *Ibidem*, p. 37.

76 Cançado Trindade, A. A., *op. cit.*, p. 38. En el mismo sentido, ver Cejil. *Guía para defensores y defensoras de Derechos Humanos. La protección de los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano*, *op. cit.*

77 Cançado Trindade, A. A. *op. cit.*, p. 46.

fondo y reparaciones a fin de que el trámite (tanto escrito como oral) fuera más ágil y, salvo casos excepcionales, se pudiera emitir una única sentencia en lugar de tres.

Las modificaciones reglamentarias de 2003 fueron en respuesta a cuestiones surgidas a partir de la puesta en práctica del Reglamento de 2000, sobre todo en lo relacionado con los plazos a ser observados por las partes.⁷⁸ Asimismo, se incluyó la figura del *affidavit*; se estableció que la CIDH fungiría como representante en caso de que las víctimas no tuvieran una representación legal; se concedieron algunas facultades a los jueces y al personal de la Secretaría; y se:

[...] abrió la posibilidad para que las medidas provisionales pu[dieran] ser solicitadas directamente a la Corte por las víctimas, sus familiares o representantes, cuando dichas medidas est[uviera]n relacionadas con casos que ya se enc[ontraban] bajo el conocimiento de la Corte. Previo a esta reforma, la solicitud de adopción de medidas provisionales debía ser hecha en todos los casos por la Comisión.⁷⁹

Las reformas de enero de 2009 tuvieron como fin avanzar en la adopción de mayor terminología, incluir nuevas figuras (como el defensor público interamericano y el orden jurídico interamericano); y reglamentar tanto prácticas añejas (v.g. la presentación de escritos de *amicus curiae*,⁸⁰ y el objeto de las pruebas rendidas en audiencia pública), como otras más actuales (p. e. las sesiones fuera de sede, publicidad de las audiencias y supervisión de fallos). Asimismo, se eliminó el término ‘familiar’ con el que se denominaba a las víctimas en distintas disposiciones; se igualaron los plazos con que cuentan el Estado y las víctimas para presentar documentos iniciales (dos meses, respectivamente); y se restringió la oportunidad procesal para objetar testigos o peritos. Se reconoció la importancia de que las víctimas sean protegidas (no solo los declarantes); se facultó a la Secretaría de la Corte IDH para realizar diligencias *motu proprio*; se restringió la figura del juez *ad hoc* para denuncias interestatales; y se amplió la facultad de la Corte IDH en relación con otras figuras, como las medidas provisionales. Asimismo, una de las reformas más trascendentales fue la disminución del rol de la CIDH en el procedimiento contencioso ante la Corte IDH.

Finalmente, las reformas de noviembre de 2009 se centraron en el rol de la CIDH; la limitación de un máximo de tres representantes comunes y la valoración de plazos diversos cuando estos existan; la regulación del uso de medios electrónicos; las pruebas; el escrito inicial de las víctimas; la sistematización de diversas prácticas procesales; la ampliación de la protección de los y las representantes; la regulación del sometimiento de denuncias interestatales; y la rectificación de las sentencias.⁸¹

A la luz del Reglamento, existe una normativa que ha sido utilizada en distintos casos: el fondo de prueba, el cual será tratado en la siguiente sección.

78 Algunos de esos plazos se ampliaron e hicieron improrrogables (v.g. la presentación del escrito original de las víctimas y la contestación del Estado demandado), mientras que otros se reglamentaron (como la presentación de anexos).

79 Cejil. *Guía para defensores y defensoras de Derechos Humanos. La protección de los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano*, op. cit., p. 130.

80 Generalmente, la Corte IDH empleaba el artículo relacionado con “otros actos del procedimiento escrito” para dar cabida a la presentación de *amici*. Como había sido explicado en su momento, “[I]a Corte recibe escritos de *amicus curiae* de manera regular, aunque no existe una disposición específica que regule su presentación”. Cfr: Sepúlveda, M. et al. *Universal and Regional Human Rights Protection. Cases and Commentaries*. University for Peace, San José, 2004, p. 21. No obstante ello, hoy en día, la Corte IDH no solo ha regulado la presentación de los mismos en una disposición concreta de su Reglamento (artículo 44), y distinguirlo de la posibilidad de que se puedan llevar a cabo otros actos del procedimiento escrito (artículo 43), sino que por vez primera tal normativa incluye una definición de la figura al describirla como “la persona o institución ajena al litigio y al proceso que presenta a la Corte razonamientos en torno a los hechos contenidos en el sometimiento del caso o formula consideraciones jurídicas sobre la materia del proceso, a través de un documento o de un alegato en audiencia”. Cfr: art. 2, “definiciones”.

81 Ver Corte IDH. Exposición de motivos de la reforma reglamentaria, op. cit.